

para ni proteje al C. Quirino Jáuregui, contra la providencia del C. Gefe político de esta capital, que le impuso la pena de quince dias de prision, en defecto de veinticinco pesos de multa.

Segundo: no se le impone la multa á que se refiere el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, por su notoria insolvencia.

Hágase saber: publíquese esta sentencia en los periódicos de estilo, y elevense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Lic. Conrado Diaz Soto, juez de Distrito del Estado. Damos fé.—Firmado.—*Conrado Diaz Soto.—Rafael Guzman.—Feliciano P. Reyes.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Marzo 3 de 1873.—*Conrado Diaz Soto.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 13 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por el C. Quirino Jáuregui, contra los procedimientos del Gefe político de esta ciudad, que lo mandó reducir á prision por el término de quince dias, en defecto de la multa de veinticinco pesos que el quejoso no pudo enterar, y cuya pena fué impuesta por faltas á la autoridad, alegando que con este hecho se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 13 y 16 de la Constitucion de 1857. Vistas las constancias de autos, y considerando: que la Gefatura política de San Luis Potosí, ha obrado en la órbita de sus atribuciones, en la imposicion de la multa y en su defecto la prision señalada; que si dicha autoridad se ha escedido en el uso de sus facultades, la ley en que ha apoyado su providencia: deja al

quejoso su derecho á salvo, para hacerlo en la vía y forma prescrita; el hecho que ha motivado el presente recurso, no importa violacion alguna de las garantías aducidas en el escrito de demanda. Con tales fundamentos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, cuya parte resolutive es como sigue: "que la Justicia de la Union no ampara ni proteje al C. Quirino Jáuregui, contra la providencia del C. Gefe político de esta capital, que le impuso la pena de quince dias de prision, en defecto de veinticinco pesos de multa."

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Artcaga.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Arza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zacala.—José Garcia Ramirez.—Juan A. Mateos, secretario.*

Es copia que certifico. México, Abril 4 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por el C. Plutarco Silva, contra el Tribunal de Justicia del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

De los hechos reseñados en el presente escrito, sobre recurso de amparo que

interpone el C. Plutarco Silva, aparece: que el Tribunal Superior del Estado pronunció una sentencia contra dicho ciudadano, por intereses particulares que se le reclamaban, obligándolo á la entrega de una finca y huerta que al pago de ellas hipotecó ante escribano público.

A virtud de esa sentencia, considera el C. Plutarco Silva, violadas en su persona las garantías individuales de que hablan los artículos 16 y 27 de la Constitución general de la República, cuyos artículos cita el declarante para probar que no tiene razón de ser la sentencia, ya porque con ella se conculcan los derechos que á él asisten, ya porque las autoridades del Estado, á quienes se dirige, ejercen ilegal ó arbitrariamente las funciones de su ministerio.

Uno y otro principio se hallan tan íntimamente enlazados entre sí, que de aceptarse como buenos los fundamentos en que trata de apoyarse el C. Silva, respecto de la incompetencia de otras autoridades, se desconocería de un modo injustificable su legitimidad, por el solo hecho de que, obrando en la esfera de sus atribuciones, obligasen á uno ó mas individuos á cumplir y respetar sus compromisos sociales.

Pero la cuestión que por ahora debe tocarse, á lo que creo, es la de si cabe ó no el recurso que se solicita.

Confiesa el C. Silva, que al *ventilarse su asunto judicialmente*, en el Estado, obtuvo en primera instancia sentencia favorable, no sucediendo lo mismo en cuanto á la segunda, que le fué adversa. Desde luego tiene que suponerse que si el C. Silva se dirigía á cualesquiera de las autoridades que hoy considera ilegítimas, y con el fallo de una se hallaba conforme, como se sabe lo estuvo en la de primera instancia, por este acto reconocía en una de esas autoridades lo que no podía desconocer en las demas del propio origen. ¿Qué hubiera dicho el C. Silva, si obtiene un fallo semejante al

que resultó en primera instancia? ¿Habría negado al que lo dictara, la legitimidad para dictarlo? En qué consiste, pues, la falta de que hace responsables á los miembros del Tribunal de Justicia? ¿No son estos responsables de sus actos, en la forma que previene la fracción VII del art. 66 del Código que sirve al Estado para su régimen político?

Ni es de buscarse, por otra parte, la defensa de tales derechos en la Carta fundamental, porque para ello seria necesario demostrar antes que los actos de aquel cuerpo (en el presente caso su sentencia) no tienen el carácter de que están revestidos, y esto, en mi sentir, no lo puede, ni lo debe resolver la autoridad Federal, cuyas atribuciones fija y demarca bien el art. 97 de esa misma Carta.

Establecida, por lo tanto, la premisa de que la cuestión que nos ocupa, se contrae á un acto puro y exclusivamente judicial, como lo es, á no dudarlo, la providencia dictada por el Tribunal de quien se querella el C. Plutarco Silva; no resta otra cosa al que suscribe, que pedir al C. juez se sirva no admitir el juicio que se intenta, por prohibirlo y comprenderle el art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Aguascalientes, Enero 18 de 1873.—
I. Ocádiz.

Es copia que certifico. Aguascalientes, Enero 18 de 1873.—*Diego Ortigosa.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

“Aguascalientes, 1º de Febrero de 1873.—Visto: En 11 del próximo pasado Enero, se presentó á este Juzgado el C. Plutarco Silva, pidiendo amparo por los sucesos desgraciados que le han acontecido desde el año de mil ochocientos cincuenta y dos hasta el presente, es decir, hace mas de veinte años. En seguida

hace la historia de sus desgracias, las que atribuye á la fatalidad de haberse dejado engañar de un tal señor Benavente; apoderado de los señores Moncadas, quien confió al quejoso la comision ó encomienda, para la venta y espendio de los efectos y esquilmos de la hacienda de Santa Catarina; refiriendo luego, sin duda para ser amparado, la clase de tales efectos y esquilmos, y las ventas y permutas que hacia con ellos; y por remate de tal historia, cuenta el fin calamitoso de aquella encomienda, pues dice que los bandidos Juan Chavez y Larumbide se los saquearon, habiéndole llevado mas de nueve mil pesos en dinero y en efectos; no creyéndose obligado el C. Silva, por tales desgracias, á pagar á su acreedor Benavente, y por lo mismo pide amparo contra la sentencia de segunda instancia que lo condenó á tan injusto pago. Luego, á fin de apoyar mejor su solicitud de amparo, inserta una disertacion completa sobre los casos fortuitos, citando todas las leyes y autores que hablan de tal materia, para probar con su autoridad lo inícuo de la sentencia contra la cual pide amparo. Tal resolucion judicial la cree tanto mas ilegal cuanto que fué pronunciada por Magistrados incompetentes, como lo son todas las autoridades y funcionarios locales del Estado, por ser vicioso el origen de su eleccion, pidiendo á la vez al Juzgado que declare la incompetencia de aquellos funcionarios judiciales. De ahí es que, aunque se comprometió por escritura pública, en el negocio de Benavente, al caso fortuito, por las circunstancias espuestas y por haberse comprometido á él contra leyes espresas, refracta semejante compromiso, por nulo y de ningun valor. De suerte que aun pide amparo el quejoso contra su propio error.

Tales son todos y cada uno de los fundamentos del recurso de amparo promovido por el C. Plutarco Silva, cuyo jui-

Tomo III.—Parte II.

cio dejó de abrirse á prueba, porque no habiendo informado la autoridad contra quien se dirigió la queja, la cuestion que se versa es únicamente de derecho y dejó de hacerse uso por tal motivo de la facultad concedida esclusivamente á los jueces por el art. 1º de la ley orgánica.

Visto el pedimento Fiscal y todas las demas constancias de autos; y

Considerando: que los recursos de amparo no se han establecido para socorrer á los desgraciados, sino para revindicar las garantías individuales consignadas en la Constitucion, y mucho ménos para remediar desgracias imposibles de reparar por haber transcurrido una série de mas de veinte años, y haber sido ocasionadas por los desaciertos de los mismos que se quejan de haberlas sufrido.

Considerando: que si fuera permitido por un negocio contencioso de cualquier particular el desconocimiento de la constitucionalidad de las autoridades y funcionarios de un Estado, no habria estabilidad en estos, quedando acéfalo aquel donde se hiciese tan absurdo desconocimiento.

Considerando: que la declaracion de la incompetencia de los Magistrados de un Tribunal superior importa un acto solemne y judicial, que no está en las facultades de un Juzgado de Distrito el resolver.

Considerando: que si se hubiera de dar amparo por la ilegitimidad de las elecciones de los funcionarios públicos, se constituiria entonces un Juzgado de Distrito en Colegio Electoral para declarar sobre la validez ó nulidad de tales elecciones, y en el segundo caso tendria que convertirse tambien en Cuerpo Legislativo para convocar á nuevas elecciones, á fin de que no quedára absolutamente sin gobernantes. ¡Poderes inmensos que no se han conferido á ninguna autoridad en la República!

Considerando: que lejos de ser permitido á un juez de Distrito el ejercicio

de tan tremendo poder, el art. 102 de la Constitución Federal y 2º de la ley orgánica le prohíbe hacer declaraciones generales de leyes ó actos, como lo pretende el C. Plutarco Silva, supuesto que apoya su querrela esencialmente en la ilegitimidad del Congreso y demas funcionarios del Estado, que dice deben su existencia á la fuerza de las bayonetas federales, sobre lo cual no puede resolver este Juzgado por no tener facultades para ello, como se ha dicho antes, y menos cuando lo ha declarado así expresa y terminantemente la Corte Suprema de Justicia de la nación, que en la superior sentencia que pronunció por unanimidad de votos el 2 de Diciembre de 1871, dice: "*que á los Juzgados de Distrito no les toca examinar ni menos decidir sobre la legalidad de las autoridades que funcionan, porque esta urgencia seria una violacion espresa del art. 40 del Código de la República.*" (Semanaio Judicial tom. 2º pag. 488)."

Considerando: que de no obrar de acuerdo con tan respetable declaratoria, se faltaría á su autoridad y se infringiría á sabiendas el art. 40 de la Constitución Federal en que se apoya; y

Considerando por último: que al interponerse el recurso de amparo se reconoce la legitimidad que se niega, supuesto que este se ha establecido por el art. 101 de la Constitución, contra autoridades y no contra simples personas particulares, el juez que suscribe, apoyado en las razones y leyes citadas, falla con las siguientes proposiciones:

1º La Justicia de la Union, no ampara ni protege al C. Plutarco Silva, en las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, que cree violadas en su persona con la sentencia del Tribunal de Justicia del Estado.

2º Notifíquese esta sentencia, publíquese en los periódicos y remítase á la Corte Suprema de Justicia para los efectos legales.

El C. Lic. Luis G. Solana, juez de Distrito del Estado, así lo decretó y firmó: damos fé.—*Luis G. Solana.*—Asistencia, *Timoteo Dávalos.*—Asistencia, *Arcadio Juarez.*"

Es copia que certificó. Aguascalientes, 3 de Febrero de 1873.—Asistencia, *Timoteo Dávalos.*—Asistencia, *Arcadio Juarez.*

EFECTUORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 22 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por D. Plutarco Silva, contra el Tribunal superior del Estado que lo condenó á segunda instancia en la demanda que sobre pesos interpuso en su contra D. Quirino Benavente, administrador que fué de la hacienda de Santa Catarina; y

Considerando: que Silva da por motivo del amparo que solicita la ilegitimidad de los Magistrados que forman aquel Tribunal, cuya jurisdiccion reconoció, como consta en el expediente: y

Considerando ademas, que el Tribunal superior del Estado de Aguascalientes, al conocer y fallar la demanda interpuesta por Benavente contra Silva, procedió dentro de la órbita de sus atribuciones, de lo que resulta que aquel conocimiento y falta no vulneran en la persona del quejoso ninguna de las garantías individuales á que se refiere la Constitución Federal, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 1º de Febrero último por el juez de Distrito de Aguascalientes, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Plutarco Silva, en las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución Federal, que cree violadas en su persona con la sentencia del supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de esta Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arceaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Aza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 31 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por el C. Fernando Arredondo y otros, contra el Ayuntamiento de México, por el acuerdo relativo á que los quejosos dejaran expedito al público el tránsito de la calle de Portaceli que embarrizaban con sus mercaderías de palma.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Promotor que suscribe, en el juicio de amparo promovido por los CC. Fernando Arredondo, José M. Huerta y sus compañeros, comerciantes en papates y sombreros de palma, contra el Ayuntamiento por haber dispuesto que no debe permitírseles que se establezcan de una manera permanente en la calle de Portaceli; supuesto el estado del juicio que es el de alegar, dice: que reproduce por vía de alegato, lo que tiene espuesto en su pedimento anterior, corroborando con el fundado informe que ha rendido la comision del Ayuntamiento encargada del ramo de mercados, de ma-

nera que con presencia del contenido del informe, espera que el C. juez, obrando en justicia, se servirá denegar el amparo que por los CC. quejosos se solicita.

México, Febrero 17 de 1873.—*Moolesuma.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

México, Marzo 16 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los CC. Fernando Arredondo, José M. Huerta, Juan Alvarado, Néstor Lopez y Dolores Gonzalez, á virtud de reputar violada en sus personas con el acuerdo del Ayuntamiento de esta ciudad dictado con referencia al comercio que los quejosos giran, la garantía que otorga el art. 4º de la Constitución; visto el informe rendido por la comision de mercados; lo pedido por la parte fiscal, y visto en fin lo que verse debia; atendiendo á que la violacion del art. 4º Constitucional que establece la libertad para abrazar la profesion ó industria que acomode, siendo útil y honesta y aprovecharse de sus productos, se hace consistir en que por acuerdo municipal se ordenó á los quejosos el que no se situasen á vender sus efectos en el lugar determinado que antes ocupaban y pasasen á la plaza de Jesus como lugar asignado al objeto; y considerando: que si bien por el espíritu del citado artículo, así como por estar ya resuelto el punto en cuanto á lo que deba estenderse la facultad para su prohibicion ó reglamento al comercio ambulante, hay que advertir que en el caso y segun el informe del Ayuntamiento y lo que los mismos quejosos espresan, la prevencion en el acuerdo municipal se ha concretado á prohibir que en un lugar determinado, la acera de una calle pública, se sitúen los dichos comerciantes obstruyen-